



Investigadora, Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la UNED
(ecarazo@uned.ac.cr)

Otra economía para los territorios rurales

..... || **Eva Carazo Vargas**



La economía tiene que ver con la manera en que se organizan los procesos de producción, intercambio y distribución de bienes y servicios en cualquier grupo humano, sea un hogar, una comunidad o un país, para resolver las necesidades existentes a partir de los recursos disponibles... Y aunque esta podría parecer una definición muy simple, en realidad un sistema económico puede organizarse de maneras muy diferentes, de acuerdo a la forma en que responda a preguntas como: ¿Cuáles son las necesidades esenciales que hay que resolver? ¿Qué, cuánto y para quién producir? ¿Con cuáles recursos se cuenta, quién los tiene y cómo pueden o no aprovecharse? ¿De qué maneras producir, cuáles costos y beneficios se relacionan con distintas opciones? ¿Cuáles consecuencias tienen diferentes modelos productivos, para distintos sectores?

El asunto se vuelve más complejo porque los grupos humanos no son homogéneos, están formados por personas que tienen necesidades, intereses, posiciones y márgenes de poder muy diversos, por lo que no hay una única respuesta a esas preguntas. Además, la forma en que se organiza

un sistema económico influye y modifica el territorio en el que se desarrolla, entendiendo el territorio como el entorno físico pero también como el espacio social que “está contenido en el espacio geográfico, creado originalmente por la naturaleza y transformado continuamente por las relaciones sociales que producen diversos tipos de espacios materiales e inmateriales, como, por ejemplo, políticos, culturales, económicos y ciberespacios” (Mançano, 2009, p.4).

Lo que sí es indudable es que, más allá de la diversidad de sistemas posibles y de cómo se expresan en los territorios, toda forma de economía ha sufrido un golpe tremendo a raíz de la pandemia y de las medidas que se han ido implementando para proteger la salud de la población. Nunca había ocurrido algo que cambiara tan radicalmente y de manera tan abrupta la realidad de todo el planeta, de cada persona que existe en cualquier lugar del mundo, y no se exceptúan de ese impacto las economías familiares ni la nacional.

Esta situación tan extraordinaria puede ser una oportunidad para reflexionar acerca del tipo de territorios (Molina-Murillo, 2018) y relaciones sociales que se configuran en el marco de un Proyecto Histórico Neoliberal (Vargas, 2015) que promueve la liberalización económica, la desregulación de mercados, el desmantelamiento de la intervención estatal y del aparato público, junto con la búsqueda de mercados externos y la apertura a productos y capitales internacionales. En este texto se reflexiona acerca de las

consecuencias que tiene esa forma de organización económica y política para los espacios rurales, y también respecto a otras formas posibles de resolver las necesidades humanas de manera más justa y sustentable.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) brinda información sobre la pobreza en Costa Rica de acuerdo al método de *Línea de Pobreza (LP)*, en función del ingreso que reciben los hogares, y también de acuerdo a la *Pobreza Multidimensional (PM)*, que contempla las privaciones que tienen los hogares en una serie de indicadores relacionados con la educación, salud, vivienda, trabajo y protección social.

Aunque la pobreza por LP es ligeramente mayor en las zonas urbanas que en las rurales, la exclusión que enfrentan éstas últimas resulta evidente al contemplar por el método de PM otros indicadores relacionados con la satisfacción de necesidades básicas, en particular los relacionados con la dimensión de salud: contar con seguro de salud y con servicios de agua potable, de eliminación de excretas y de eliminación de basura (INEC, 2020).

Los datos que se presentan en el **Cuadro 1** resultan útiles para ilustrar el enorme reto que implica la reactivación de la economía rural y la superación de las brechas existentes.

Cuadro 1. Línea de Pobreza (LP) y pobreza multidimensional (PM) por zona urbana y rural en Costa Rica, julio 2020 (INEC, 2020).

	Total país	Zona Urbana	Zona Rural
Línea de pobreza		112 266	86 439
Brecha de pobreza por LP	10.1	10.2	9.8
Severidad de pobreza por LP	5.7	5.8	5.5
Porcentaje de hogares en PM	16.1	12.2	26.3
Porcentaje de personas en PM	20.1	16.2	30.4
Incidencia de PM	16.1	12.2	26.3
Intensidad de PM	26.3	25.8	26.9
Índice de pobreza multidimensional IPM (*)	4.2	3.1	7.1

*Producto de la incidencia y la intensidad, representa el porcentaje de privaciones ponderadas que sufren los hogares pobres respecto al total de privaciones posibles.

La existencia de distintos modelos de producción agropecuaria tiene una enorme incidencia en la configuración de espacios rurales. En el marco del Proyecto Histórico Neoliberal, la política pública agropecuaria ha estimulado iniciativas agroindustriales corporativas orientadas prioritariamente a la exportación, en detrimento de los servicios de acompañamiento a la agricultura familiar campesina alimentaria que produce para el mercado local y nacional.

Los últimos Censos Agropecuarios, realizados en 1984 y 2014, evidencian que en ese período la tierra de uso agrícola se redujo en un 21.6 %, y la cantidad de fincas en un 8.7 %. Pero además que la producción agropecuaria, de enorme relevancia en las economías rurales, está concentrada en pocas y poderosas manos: el 61.4 % de las fincas existentes son pequeñas, con una extensión inferior a las

10 hectáreas, pero representan apenas el 7.5 % del área dedicada a la producción, mientras que el 60 % de esa área se concentra en apenas un 4.8 % de las fincas, con extensiones superiores a las 100 hectáreas (INEC, 2015).

El monocultivo de piña, que creció un 1422 % en el período entre los dos Censos Agropecuarios (INEC, 2015), es un buen ejemplo de las consecuencias que tiene la agroindustria exportadora en las economías y los territorios rurales. La producción piñera se ha expandido de manera exponencial, en ocasiones incluso sin seguir procedimientos y regulaciones vigentes como son la necesidad de registro ante la SETENA y la valoración del impacto ambiental que pueda provocar esta actividad, o el cumplimiento de la legislación laboral que en teoría garantiza a las personas trabajadoras un salario mínimo, protección de seguridad social y



Cultivo de piña de manera intensiva Upala

salud ocupacional, así como el derecho de organizarse autónomamente para velar por sus intereses.

Hay comunidades rodeadas por piñeras que enfrentan contaminación del agua, el suelo y el aire por el uso intensivo de agro venenos especialmente tóxicos y persistentes, que también provocan problemas de salud a los trabajadores, a personas y animales en las poblaciones vecinas. Entre 2013 y 2018 se documentaron más de 1 200 denuncias relacionadas con la piña por aspectos como tala de árboles, contaminación de aguas, invasión de áreas de protección, ausencia de viabilidad ambiental, afectación al ganado por la mosca de establo que se produce a raíz del mal manejo del rastreo, o malas condiciones laborales (CU-UCR, 2018).

La expansión piñera también ha desplazado otras actividades económicas en los territorios donde se desarrolla,

reduciendo las opciones de trabajo para la población local. Esta situación es aún más crítica en los cantones cercanos a la frontera con Nicaragua, pues la oferta de mano de obra migrante regular e irregular, junto con la tolerancia a sistemas de subcontratación y con la debilidad fiscalizadora y reguladora del Estado, facilita a algunas empresas el contratar personal en condiciones de explotación.

Y a pesar de todo esto, en esos mismos territorios persisten aún otras formas de

practicar la agricultura, hay familias que insisten en producir alimentos para su propio consumo y para el mercado local, que se niegan a usar agrotóxicos que enferman a la tierra, que impulsan esfuerzos de reforestación y recuperación de la biodiversidad, que tratan de superar prácticas clientelares que no resuelven sus problemas, y que se organizan para defender sus derechos y para tejer redes económicas solidarias.

La reactivación de la economía podría seguir el mismo camino que hasta ahora, uno que ha estimulado un desarrollo centralista, con profundas desigualdades entre los espacios rurales y urbanos, así como a lo interno de ellos. Es una lógica que coloca a la ruralidad como proveedora de bienes que son esenciales para la supervivencia pero que no se reconocen

como tales, y que tiene a muchas de las personas que habitan estos territorios viviendo en condiciones precarias, con poquísimas opciones de empleo o trabajo digno, con poco acceso a servicios públicos... Un camino que significa también para las zonas periféricas una débil presencia del Estado, que no alcanza siquiera a fiscalizar el cumplimiento de la legislación existente para garantizar los derechos humanos más básicos.

Pero reactivar la economía también podría significar un viraje, un cambio de rumbo que facilite un desarrollo sustentable para todo el territorio nacional, de forma que los espacios rurales puedan seguir aportando a la soberanía y seguridad alimentaria del país y que al mismo tiempo sus habitantes cuenten con comida en la mesa y una casita digna para vivir, con agua limpia para beber, producir y lavarse las manos en tiempos de pandemia, que puedan elegir un trabajo que les genere un ingreso justo y les permita construir economías locales vivas y sustentables.

Esa otra economía debería responder a las preguntas de qué, cómo y para quién producir, considerando al menos los siguientes aspectos:

- La comprobada *capacidad de la agricultura familiar campesina agroecológica para garantizar la alimentación* de la humanidad a través de relaciones sustentables con la naturaleza, reconociendo el valor de las culturas, saberes y trabajos de las comunidades indígenas

y campesinas, así como la manera en que esos tejidos comunitarios han hecho posible la producción de alimentos diversos, nutritivos y saludables a lo largo de la historia (Grupo ETC, 2010). Paralelamente es necesario cuestionar los efectos de la agroindustria exportadora en la configuración de los territorios rurales y en la vida de la gente en el campo, considerando el diferencial de poder existente entre las familias y organizaciones campesinas con respecto a las empresas agroindustriales. Producir alimentos para el campo y para las ciudades debería ser una actividad rentable, que permita a la gente resolver sus necesidades básicas con dignidad y sin arriesgar la salud de las comunidades rurales o los equilibrios ambientales.

- La *conformación y consolidación de redes de economía solidaria*, en las que la producción, el intercambio y el consumo de bienes y servicios se orientan a partir de principios de autogestión, justicia, solidaridad, cooperación, asociatividad, equidad, reciprocidad, democracia, sustentabilidad y eficiencia social. La economía solidaria reivindica la centralidad del trabajo (no del capital) como aporte humano para la producción y reproducción de la vida, prioriza la solución de necesidades y el fortalecimiento de la actividad económica común por sobre el lucro y la acumulación privada,

estimula la cooperación en vez de la competencia, y reconoce el valor de las contribuciones que puede hacer cada persona. Vale resaltar que en Costa Rica y en todo el mundo existen ya muchas experiencias de economía solidaria que entrelazan los territorios rurales y urbanos en redes colaborativas, que han sido fundamentales para la supervivencia de los sectores más vulnerables en momentos de crisis como el que estamos viviendo, cuando la economía hegemónica muestra sus fisuras.

- La urgencia de establecer *relaciones más respetuosas y sustentables con la naturaleza*, cuya capacidad de resiliencia se ve cada vez más fracturada debido a formas de extractivismo y explotación que no solamente han generado una crisis ambiental sin precedentes (Carazo *et al.*, 2012, Carazo, 2013), sino que también provocan una enorme conflictividad en los territorios rurales debido a la presión por el uso y control de la tierra, el agua y la biodiversidad. Se trata de conflictos distributivos que les han costado la paz e incluso la vida a personas defensoras del ambiente, en los cuales el Estado debería jugar un claro rol para proteger el bienestar colectivo.
- *Reconocer las desigualdades existentes y hacer lo necesario para revertirlas.* Una reactivación de la economía rural requiere mejores condiciones de salud, educación y



Afiche de invitación a la IX Feria de Economía Social Solidaria, que reunió más de 150 iniciativas de todo el país.

trabajo para quienes habitan en estos territorios. También es necesario superar la brecha tecnológica que actualmente dificulta la comunicación, el seguimiento de procesos educativos y la misma posibilidad de impulsar iniciativas económicas, en comunidades que no cuentan con conectividad o donde la gente no tiene aún una alfabetización tecnológica que le permita hacer un uso estratégico de las herramientas

disponibles. Por otro lado, es vital reconocer, valorar y redistribuir las tareas de cuidado, que socialmente se han recargado sobre todo en las mujeres al grado de dificultar de manera significativa su vinculación con otras actividades productivas, y que se suelen subestimar al tratarse de trabajo no remunerado, a pesar de que son absolutamente indispensables para la producción y reproducción de la vida.

La consolidación de otra economía no puede depender de la voluntad individual, ni siquiera de los esfuerzos más o menos articulados de las experiencias que ya existen, y que están demostrando que es posible resolver las necesidades humanas de maneras más justas y sustentables. Necesitamos una apuesta colectiva y estructural por el bien común, y eso incluye el impulso de una economía que coloque en el centro a las personas, que permita una configuración más justa y sustentable de los territorios rurales y urbanos.

Referencias

- Carazo, E., Figueroa, A., Pentzke, C. (2012). *Cambio climático y ecosistemas en Centroamérica: una oportunidad para la acción*. Centro de Estudios y Publicaciones Alforja y Proyecto Estado de la Región. CONARE. Costa Rica. http://repositorio.conare.ac.cr/bitstream/handle/20.500.12337/937/976.%20Cambio%20clim%3%a1tico%20y%20ecosistemas%20en%20Centroam%3%a9rica_Una%20oportunidad%20para%20la%20acci%3%b3n.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Carazo, E. (2013). Crisis climática y agricultura: otra racionalidad para preservar la vida. *Revista Rupturas*, 3(1), 88-111. <https://doi.org/10.22458/rr.v3i1.257>
- Consejo Universitario UCR (2018). *Pronunciamiento sobre las consecuencias socioambientales de la producción y agroindustria de la piña en Costa Rica*. Acuerdo firme de la sesión N.º 6235, artículo 5, del martes 6 de noviembre de 2018.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. (2015) *VI Censo Nacional Agropecuario. Características de las fincas y de las personas productoras*. San José, Costa Rica.
- Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC. (2020) *Encuesta Nacional de Hogares Julio 2020. Resultados generales*. San José, Costa Rica.
- Grupo ETC (2010). Quién alimenta al mundo. *Revista Biodiversidad, Sustento y Culturas* #64, 14-22.
- Mançano, B. (2009) *Movimientos socio territoriales y movimientos socioespaciales. Contribución teórica para una lectura geográfica de los movimientos sociales*. Mimeo. CLACSO.
- Molina-Murillo, S. (2018). Eco territorios: espacios resilientes de interacción rural y urbana. *De Res Architettura*, 3: 61-65. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/drarchitettura/article/view/22837/22434>
- Vargas, L. (2015). El Proyecto Histórico Neoliberal en Costa Rica (1984-2015): devenir histórico y crisis. *Revista Rupturas*, 6(2), 147-162. <https://doi.org/10.22458/rr.v1i1.1167>